

Morena toma distancia, los obreros exigen justicia y el IMSS enfrenta la pregunta incómoda: ¿alcanzará para todos?

La semana comienza con tres señales que ponen a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas. Morena retiró a Rubén Rocha Moya de sus asambleas por la soberanía para contener el costo político del caso; los trabajadores de AHMSA buscan impedir que la venta de la siderúrgica vuelva a dejarlos sin respuesta; y el IMSS enfrenta críticas por saturación y tiempos de atención justo cuando el Gobierno prepara un sistema que permitirá atender a más personas en cualquier institución pública de salud. El reto no es anunciar más derechos, sino garantizar que puedan ejercerse.

Morena comenzó a mover sus piezas con mayor cautela. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quedó fuera de las asambleas partidistas convocadas para defender la soberanía nacional, pese a que él mismo había colocado ese argumento en el centro de su respuesta frente a los señalamientos provenientes de Estados Unidos. La decisión no significa que haya sido expulsado del partido ni demuestra responsabilidad en las acusaciones formuladas en su contra, pero sí confirma que la dirigencia busca evitar que el caso monopolice su agenda pública.

El movimiento es políticamente revelador porque Morena intenta separar dos discusiones que durante semanas caminaron juntas. Una es la defensa de México frente a posibles intervenciones, presiones o acusaciones extranjeras sin pruebas suficientes. La otra es la situación personal y política de un gobernador con licencia que se convirtió en un problema reputacional para el partido. Defender la soberanía no obliga a defender de manera automática a cada funcionario; tampoco permite sustituir una investigación por condenas mediáticas. El equilibrio parece simple en el discurso, pero es mucho más complicado cuando comienzan las definiciones rumbo a 2027.

Morena sabe que una candidatura cuestionada puede contaminar una elección completa. También sabe que apartar a un personaje sin explicar las razones genera sospechas. Por eso, el caso Rocha pone a prueba algo más que la unidad partidista: pone a prueba la capacidad del movimiento para investigar a los propios sin convertir el proceso en un ajuste político ni en un pacto de silencio.

Mientras controla ese frente, el oficialismo refuerza su principal activo territorial. En Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años y presentó el programa como reconocimiento al trabajo de cuidados. El mensaje conecta con millones de mujeres que durante décadas sostuvieron hogares sin recibir salario, seguridad social ni reconocimiento económico.

La combinación es clara: reducir la exposición de los expedientes que generan desgaste y aumentar la presencia de programas con impacto directo. Esa será, previsiblemente, una parte central de la estrategia oficialista hacia 2027.

Pero otro asunto amenaza con cruzarse en el terreno electoral: el huachicol fiscal. Autoridades federales aseguraron en Reynosa una presunta refinería clandestina con aproximadamente 3.77 millones de litros de hidrocarburos, vehículos, tanques y equipo industrial valuado en más de 120 millones de pesos. No se informó de personas detenidas.

La magnitud de la instalación cambia la conversación. Ya no se trata únicamente de personas perforando ductos durante la madrugada. Una operación de ese tamaño necesita conocimiento técnico, suministro de materia prima, energía, transportistas, compradores y protección frente a autoridades que deberían detectar movimientos de ese volumen. La pregunta no es sólo cómo operaba, sino quién garantizaba que pudiera hacerlo.

Asegurar la infraestructura es un primer paso. Identificar a propietarios, operadores, funcionarios y beneficiarios será la verdadera prueba. De lo contrario, el Gobierno habrá decomisado fierros, pero no desmantelado el negocio.

El segundo gran frente está en Coahuila. Altos Hornos de México, durante décadas motor económico de Monclova, avanza hacia una subasta que definirá el destino de sus instalaciones, sus activos y miles de créditos laborales. La autoridad judicial ajustó las condiciones para considerar los derechos de los trabajadores, después de años de inconformidad, salarios pendientes, negocios cerrados y familias sin ingresos.

El riesgo es que la operación se evalúe únicamente por cuánto dinero ofrezca un comprador. Para Monclova, no basta vender la planta: se necesita recuperar

actividad productiva, empleos y cadenas de proveedores. Una empresa puede cambiar de dueño en un expediente; una región no se recupera con una firma.

Los obreros necesitan representación colectiva efectiva porque compiten dentro del concurso con bancos, acreedores y grupos empresariales que cuentan con equipos jurídicos y financieros especializados. La prioridad laboral debe reflejarse en hechos: reconocimiento de créditos, calendario de pagos y condiciones de reapertura.

El contexto general del empleo tampoco ayuda. Distintos reportes advierten que la incertidumbre alrededor del T-MEC y factores internos están inhibiendo la creación de puestos de calidad, mientras trabajadores de la maquila textil enfrentan condiciones precarias.

El problema es más profundo que una cifra mensual. Un empleo formal puede existir en la estadística y ser insuficiente en la vida cotidiana si ofrece bajo salario, alta rotación, jornadas excesivas o pocas posibilidades de permanencia. Para los sindicatos, el desafío consiste en defender derechos actuales y prepararse para la automatización, la transición tecnológica y el cambio de cadenas productivas.

El tercer frente es la salud. Una columna publicada en Reforma sostiene que el crecimiento de consultorios anexos a farmacias y pequeñas clínicas privadas es resultado de la saturación del sistema público, la falta de medicamentos y los largos tiempos de espera. El texto, de carácter editorial y sustentado en declaraciones de un diputado opositor, afirma que incluso personas afiliadas al IMSS pagan consultas privadas para recibir atención más rápida.

Las cifras citadas requieren verificación oficial, pero el fenómeno no puede descartarse con un comunicado. Cuando un trabajador paga cuotas al IMSS y después paga otra consulta porque no obtuvo atención oportuna, siente que financia dos sistemas y recibe uno a medias.

Esta discusión llega justo cuando el Gobierno prepara el Sistema Universal de Salud, mediante el cual una persona podrá atenderse en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. La idea busca terminar con la fragmentación y aprovechar la infraestructura pública disponible. Suena bien. El problema empieza

cuando se pregunta quién pagará, qué institución recibirá a más pacientes, cómo se compartirán expedientes y qué ocurrirá con unidades que ya operan saturadas.

Universalizar el derecho sin ampliar la capacidad puede producir el efecto contrario: más personas con acceso legal, pero más tiempo esperando una cita.

El IMSS necesita llegar a esa transformación con un modelo financiero definido, mayor capacidad en medicina familiar, contratación de personal, abasto medible y sistemas compatibles. También necesita proteger los derechos de quienes lo financian mediante cuotas. La universalización no debe significar que los asegurados pierdan oportunidad de atención; debe significar que todas las instituciones crezcan y se coordinen.

La jornada deja una conclusión que atraviesa política, trabajo y salud. Las instituciones pueden ampliar programas, anunciar investigaciones y organizar subastas, pero su credibilidad depende del resultado final. Morena será evaluado por su capacidad para investigar sin encubrir; el Gobierno, por dismantelar redes de huachicol y no sólo decomisar instalaciones; la justicia mercantil, por proteger realmente a los trabajadores de AHMSA; y el IMSS, por atender a más personas sin deteriorar el servicio.

México no necesita únicamente nuevos derechos escritos, nuevas consignas o nuevas cifras. Necesita que los derechos lleguen a tiempo, que las investigaciones alcancen a quienes mandan y que los trabajadores no vuelvan a pagar la factura de decisiones que nunca tomaron.

Porque al final la pregunta no es cuántas personas caben en el sistema, sino si el sistema todavía puede responder cuando todas ellas lo necesitan.